IX. Costa Rica: la aprobación del Protocolo de Nagoya la ley para combatir la contaminación por plástico

ALDO MILANO S.

Doctor en Derecho ULACIT Costa Rica

Doctor en Derecho UNED España

Abogado especialista en Derecho Público Costa Rica

SUMARIO: 1. *Costa Rica se convierte en el signatario N.º 38 del Protocolo de Nagoya.* 1.1 Trámite de aprobación del Protocolo. 1.2 Importancia del Protocolo para Costa Rica.–2. *Reglamentación de la ley para combatir la contaminación por plástico.* 2.1 Breve comentario sobre la Ley No. 9786. 2.2 Disposiciones de interés del reglamento. 3. *De la prohibición de productos que contengan clorotalonil.* *Bibliografía.*

RESUMEN

En el presente artículo se examina tres disposiciones normativas en materia ambiental adoptadas en el año 2023 en Costa Rica. En primer lugar, se analiza la adhesión de Costa Rica al Protocolo de Nagoya, detallándose el proceso legislativo, así como la importancia del protocolo para el país, especialmente en términos de conservación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En segundo lugar, se estudia la aprobación tardía del reglamento de la Ley para combatir la contaminación por plástico, que establece prohibiciones sobre el uso de ciertos productos plásticos. Finalmente, se aborda la prohibición del uso del clorotalonil, medida impulsada por una orden de la Sala Constitucional, que respondió a informes técnicos que identificaron riesgos significativos asociados con el producto.

ABSTRACT

The present article examines three regulatory developments in environmental matters in Costa Rica. Firstly, it analyzes Costa Rica's adherence to the Nagoya Protocol, detailing the legislative process and the protocol's importance for the country, especially in terms of conservation and recognition of indigenous peoples' rights. Secondly, it discusses the delayed approval of the regulation for the Law to Combat Plastic Pollution, which establishes prohibitions on the use of certain plastic products. Finally, it addresses the prohibition of the use of chlorothalonil, a measure driven by an order from the Constitutional Court, which responded to technical reports identifying significant risks associated with the product.

PALABRAS CLAVE

Derecho ambiental internacional. Recursos genéticos. Contaminación.

KEYWORDS

International environmental law. Genetic resources. Contamination.

1. COSTA RICA SE CONVIERTE EN EL SIGNATARIO N.º 38 DEL PROTOCOLO DE NAGOYA

El Protocolo de Nagoya se adopta en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de 29 de diciembre de 1993.

El CBD es el resultado de la recomendación de un grupo especial de expertos sobre diversidad biológica de Proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que iniciaron la exploración de la necesidad de aprobar un convenio internacional sobre esa materia. Esa iniciativa culminó en la Conferencia de Nairobi de 1992 en la cual se aprobó el texto acordado del convenio.

Posteriormente, un total de 168 países lo firmaron, entrando a regir el 29 de diciembre de 1993 (cdb.int/history).

El CBD cuenta con tres objetivos según su artículo 1:

- La conservación de la diversidad biológica;
- La utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica;
- La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

En esta ocasión, interesa referirse al tercer objetivo, para lo cual debe empezarse por definir la noción «recursos genéticos» sobre la cual abunda el Protocolo de Nagoya como se verá.

Pues bien, según la definición del CBD, se entiende por recursos genéticos «el material genético de valor real o potencial» –art. 2–.

Con relación al tercer objetivo, el artículo 15 del mismo convenio establece:

«1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.

2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéti-

cos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio.

3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante a los que se refieren este artículo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el presente Convenio.

4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo.

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa.

6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes, y de ser posible en ellas.

7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas».

De este modo, el Protocolo de Nagoya viene a complementar las disposiciones del CBD en lo que al tercer objetivo mencionado se refiere.

En efecto, el referido instrumento internacional viene a suministrar un instrumental normativo de referencia con relación a la utilización de los recursos genéticos. Según explica Cabrera (2023) el referido instrumento internacional se redactó «con un alto grado de ambigüedad y flexibilidad en sus principales componentes, posiblemente, debido a que era la única manera de alcanzar un acuerdo sobre su contenido».

Del Protocolo es posible derivar, como lo expone Cabrera, una serie de acciones nacionales como la definición de su ámbito de aplicación, relación con otros instrumentos internacionales en materias afines, participación justa y equitativa en los beneficios, acceso a recursos genéticos, acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, contribución a la conservación y utilización sostenible, así como cumplimiento de las leyes de acceso y de conocimientos tradicionales, tema en el cual Costa Rica no ha profundizado como lo pretende inducir el Protocolo.

1.1 TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL PROTOCOLO

El largo *via crucis* que se recorrió para la final aprobación del Protocolo inició con la firma del Embajador, representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas el 6 de julio de 2011.

Posteriormente, el Protocolo fue enviado para su aprobación legislativa, lo que generó el expediente legislativo número 21550.

Consta en dicho expediente que de acuerdo con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se decidió consultar a veintitrés asociaciones de desarrollo de reservas indígenas el proyecto de ley de aprobación del protocolo en comentario.

El 17 de enero de 2023 se aprueba en primer debate mediante 41 votos a favor y 11 en contra la ley de aprobación del protocolo.

Acto seguido, se remite a control preventivo de constitucionalidad la propuesta de ley a efecto de que la Sala Constitucional se pronuncie al respecto.

El artículo 7 párrafo primero de la Constitución Política costarricense establece que «Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes».

Por su parte, en el artículo 10 inciso b), se le atribuye a la Sala Constitucional la tarea de «conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley».

Precisamente por ello, en el caso del Protocolo de Nagoya, una vez que se aprobó en primer debate, se remitió de oficio a la Sala Constitucional para someterlo al correspondiente control preventivo de constitucionalidad.

En su análisis de constitucionalidad, la Sala estimó de modo unánime que por el fondo el protocolo no presentaba vicios de constitucionalidad.

No obstante, en lo que a la existencia de vicios de forma en el trámite parlamentario de aprobación del protocolo, se dio una votación dividida dado que la minoría de los magistrados (tres) estimaron que sí se dio un vicio formal en el procedimiento de consulta del protocolo a los pueblos indígenas considerando como parámetro de constitucionalidad para ello el artículo 6 del convenio 169 de la OIT.

Por su parte, la mayoría de los magistrados (cuatro) estimaron que tal vicio no se produjo (Res. No. 06154-2023).

Para la minoría «el proyecto de ley consultado afecta directamente a los pueblos o comunidades indígenas, pues atañe al acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales cuando dichos conocimientos estén relacionados con recursos genéticos y a la participación justa y equitativa de esos pueblos en los beneficios derivados de su utilización. En otras palabras, sí existe una relación directa del proyecto de ley de «Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica y su anexo» con los intereses de los pueblos indígenas, y su contenido les afecta en forma particular y directa, por lo que debía ser consultado a dichas comunidades conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT».

Para llegar a esa conclusión, la minoría estimó que «las actuaciones realizadas en este caso concreto no alcanzan para cumplir lo preceptuado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, por las siguientes razones. La consulta, que como se explicó es imperativa y no facultativa, como la calificó el dictamen del departamento de estudios y servicios técnicos, se realizó de conformidad con lo reglado en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa para consultas institucionales. Sin embargo, por un lado, esa norma en particular, ni el canon 111 de esa misma reglamentación parlamentaria, regulan de manera expresa el trámite de audiencias a las comunidades indígenas. En rigor, el parámetro de esa normativa precisa el trámite de audiencia a las propuestas legislativas que requieran de audiencia al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma. Si bien esa regulación se ha extendido a las asociaciones y otras entidades públicas, lo cierto del caso es que en orden a los compromisos internacionales asumidos a partir del convenio 169 de la OIT, en concreto, numeral 6, dicho precepto, que fija una audiencia de 8 días a esas instancias destinatarias potencialmente afectadas (incidadas), no se constituye como un medio idóneo para garantizar la efectiva participación y opinión de las comunidades indígenas y el correspondiente deber de consulta».

Por su parte, para la mayoría, «existe una línea jurisprudencial de este Tribunal, según la cual, si la medida normativa o administrativa que se prevea es de alcance general, y no hay una afectación particular a los intereses de los pueblos indígenas, no resulta obligatoria la consulta a los pueblos interesados en los términos del artículo 6 del Convenio de la OIT. *Contrario sensu*, si la medida legislativa o administrativa que se prevea afectación particular a los intereses de los pueblos indígenas, la medida legislativa o adminis-

trativa «*es susceptible de afectarles directamente*» en los términos del artículo 6 del indicado convenio, y la consulta a los pueblos indígenas es imperativa». Además, manifestaron que «la jurisprudencia de este Tribunal, ha señalado también, respecto a la obligación de que la consulta se realice «*en particular a través de sus instituciones representativas*», contenido en el artículo 6 párrafo 1 del Convenio 169 de la OIT, que en principio, dicha consulta debe ser canalizada a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral correspondientes, ya que estas entidades son las encargadas de representar judicial y extrajudicialmente a las comunidades indígenas, de modo que, en el estado actual del ordenamiento, califican como «instituciones representativas» de las comunidades indígenas y en la sentencia N. 2002-2623, definió que no resultaba inconstitucional la representación que ostentan las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, especialmente cuando se trata de la administración de las reservas indígenas».

De este modo, en definitiva, se estableció por mayoría que el proyecto de ley de aprobación del Protocolo no presentaba vicios de forma y por unanimidad que tampoco presentaba vicios de fondo.

Sucesivamente, se dio la votación en segundo debate para que se aprobara mediante ley número 10372 del 14 de noviembre de 2023.

1.2 IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO PARA COSTA RICA

No cabe duda de que contar con una disposición como la comentada es de vital interés para un país como Costa Rica.

Como bien expone Cabrera, la aprobación del Protocolo «regula aspectos cruciales para la nación con una gran diversidad biológica (aproximadamente un 5% del mundo), capacidades científicas y tecnológicas elevadas para el uso de esta y una normativa de vieja data –y pionera– contemplada, fundamentalmente, en la Ley de Biodiversidad de 1998 y varios reglamentos derivados de ella».

Dentro de las ventajas que identifica el mismo autor para Costa Rica producto de la aprobación del protocolo, se encuentra que logra inducir «el apoyo al cumplimiento de la normativa nacional en países donde se lleva a cabo la investigación y el desarrollo». Expone como ejemplo, el Reglamento 511/2014 de la Unión Europea el cual obliga a los usuarios de recursos genéticos de los territorios en que es de aplicación el reglamento, a cumplir con la normativa de los países de origen, mecanismo que procura evitar la «biopiratería».

Por otra parte, estima con razón que la aprobación del protocolo «constituye un progreso relevante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus conocimientos tradicionales y los recursos genéticos ubicados en sus territorios».

Con todo, interesa destacar que, como lo menciona el mismo autor, los beneficios se darán en tanto «los mecanismos necesarios para su adecuada ejecución se ponen en vigencia».

En efecto, aprobado el protocolo la tarea no ha terminado. Es preciso desarrollar la normativa que lo logre hacer eficaz, sea tanto de rango legal como reglamentario. Corresponde por ello desarrollar esas fuentes normativas de menor rango que permitan la diseminación de los beneficios del protocolo.

De hecho en el dictamen unánime afirmativo de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, emitido en el trámite legislativo, se hizo ver que «siendo Costa Rica uno de los pocos países que cuenta con legislación nacional que regule el acceso a recursos genéticos de la biodiversidad» en preciso ampliar esa base normativa considerando que el protocolo «incluye temas, que no están abordados o desarrollados en nuestra Ley de Biodiversidad y que resultan de relevancia...» (Expediente Legislativo No. 21.550).

2. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO

Desde el 6 de diciembre de 2019 entró en vigencia la Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente.

Según el transitorio I de la referida ley «El Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Salud, con base en criterios técnicos y previa consulta pública, reglamentará la presente ley en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de su publicación en el diario oficial la Gaceta. Dicha publicación se dio, precisamente, el 6 de diciembre de 2019.

No obstante, no es sino hasta el 10 de marzo de 2023 que se aprueba su reglamento, con lo cual se logra finalmente subsanar la ilegítima inactividad formal del Poder Ejecutivo que violentó por muchos meses la disposición del citado transitorio.

De seguido se comentará, brevemente, el contenido de la ley para luego examinar el contenido de su reglamento.

2.1 BREVE COMENTARIO SOBRE LA LEY NO. 9786

La ley es una breve, muy breve disposición normativa considerando la materia regulada.

En efecto, la ley consta de tan sólo 11 artículos y cuatro transitorios, varios de ellos dedicados a la regulación de plazos en los que entrarían a regir las prohibiciones dispuestas por la ley.

En efecto, se estableció que las disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 que prohíben el uso de «pajillas plásticas» –entiéndase pajitas o cañas plásticas–, de bolsas plásticas y de botellas plásticas, empezaría a regir «doce meses después de la entrada en vigor del reglamento de la presente ley –quizá esto explica la referida demora–.

Por su parte, el transitorio III determinó que el artículo 6 de la ley «no aplicará para las condiciones y contratos previamente establecidos a la entrada en vigencia de la presente ley». Según el artículo 6 «Se prohíbe para las nuevas adquisiciones o compras de todas las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades la compra de artículos de plástico de un solo uso, entre los que se encuentran los platos, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas, pajillas y removedores desechables y otros utilizados principalmente para el consumo de alimentos».

Finalmente, el transitorio IV establece que se «exceptúa por un plazo de tres años, contado a partir de la publicación de esta ley, las pajillas que estén adjuntas al empaque».

Como se aprecia, estas disposiciones transitorias vinieron a introducir una serie de medidas para retrasar la aplicación de las distintas prohibiciones de la ley en el tiempo, siendo de especial impacto la que sujetó la vigencia de las prohibiciones de uso de pajillas, bolsas y botellas plásticas al transcurso de doce meses luego de la aprobación del reglamento.

Como se puede deducir, esto ha hecho que no será sino hasta el 21 de agosto de 2024 –casi cinco años después de aprobada la ley– que tales prohibiciones serán aplicables.

2.2 DISPOSICIONES DE INTERÉS DEL REGLAMENTO

La usual inactividad formal del Poder Ejecutivo en la reglamentación de las leyes suele superarse en materia ambiental a partir de órdenes vinculantes de la Sala Constitucional que determinan un plazo para que se cumpla con ese deber constitucional.

En el caso concreto, sin embargo, ello no fue así. Tampoco fue una iniciativa cristalina del Poder Ejecutivo lo que hizo que se superara la ilegítima omisión de reglamentar la ley con la referida consecuencia de que no serían de aplicación las principales prohibiciones definidas por el legislador.

En este caso concreto, fue debido al ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que el país se vio en la obligación de ponerse a tono en materia de contaminación mediante residuos plásticos.

En efecto, la aprobación de dicho reglamento fue el resultado de las disposiciones del Plan de Cumplimiento a que se obligó Costa Rica en concordancia con recomendaciones técnicas de la OCDE. El Acuerdo de Adhesión establece que se debía implementar nueve instrumentos jurídicos, sobre lo cual debía presentarse un informe en el año 2022 y el 2023 de los avances.

Precisamente, el noveno de los instrumentos jurídicos que debían ser aprobados deriva del deber de poner a tono la normativa con la «Recomendación del Consejo sobre la reutilización y el reciclaje de envases para bebidas [OECD/LEGAL/0159], para lo cual Costa Rica solicitó un plazo de implementación.

En el informe de 10 de abril de 2020 de la Dirección de Medio Ambiente del Comité de Política Ambiental de la OCDE referido al proceso de adhesión de Costa Rica a esa organización en áreas de medio ambiente y residuos, se expone (apartado 3.15 Gestión de residuos), párrafo 157 lo siguiente:

«157. El objetivo de la Recomendación OECD/LEGAL/0159 es asegurarse de que los productores y usuarios asuman los costos ambientales derivados de la producción, el uso y el desecho de envases de bebidas y promover, al mismo tiempo, el reciclaje y la reutilización de los envases de bebidas. La Recomendación propone una serie de medidas, tales como la introducción de sistemas de envases rellenables, instrumentos económicos como impuestos sobre los productos o los envases, sistemas de depósito obligatorio y estandarización de productos».

Debido a las carencias normativas antes referidas, para cumplir con tales metas, se solicitó un plazo de implementación hasta finales de 2021, si bien, como se ha visto, el reglamento no terminó siendo aprobado sino hasta en 2023.

Valga señalar que las disposiciones del reglamento en realidad no vinieron a enriquecer normativamente el panorama, siendo breve –lo que no se censura *per se*– y poco preciso en materias que requerían mayor detalle.

Pero para cerrar con broche de oro en la labor de retardo de la vigencia de las disposiciones, según el artículo 11 del reglamento «empezará a regir a partir de cuatro meses después de su publicación en el diario oficial La Gaceta».

3. DE LA PROHIBICIÓN DE PRODUCTOS QUE CONTENGAN CLOROTALONIL

Mediante decreto ejecutivo número 44280-S-MAG-MINAE, finalmente el Poder Ejecutivo aprobó la prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, reempaque, reenvaso, manipulación, venta, mezcla y «el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo Clorotalonil».

Para ello, fue necesario que se debatiera en estrados judiciales sobre la inconveniencia de ese producto para la salud y el ambiente.

En efecto, la aprobación de dicho decreto ejecutivo tampoco fue producto de la iniciativa del Poder Ejecutivo, sino más bien del efecto vinculante de una orden de la Sala Constitucional adoptada mediante la resolución número 2023-13384.

En efecto, la Sala Constitucional adoptó el referido fallo estimatorio de una demanda de amparo, condenando al Poder Ejecutivo a ejecutar las recomendaciones vertidas en un informe técnico que determina la presencia en fuentes de agua potable de metabolitos del clorotalonil en una zona de gran actividad agrícola y que, presuntamente, utiliza de modo extensivo ese producto fungicida.

De hecho, en el referido informe técnico se manifestó que «A nivel internacional en la Unión Europea se decidió en el 2019 prohibir el uso del plaguicida clorotalonil porque se identificó un problema crítico en relación con la contaminación de las aguas subterráneas por los metabolitos del plaguicida. La Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil, como tal, está clasificado como carcinógeno. Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), ha determinado que los productos del clorotalonil no suponen riesgos para los seres humanos o el medio ambiente mientras que se sigan los usos autorizados y las indicaciones de la etiqueta del producto. Sin embargo, ha declarado que existe un faltante de estudios para determinar riesgos por sus metabolitos. En conclusión, desde el punto de vista de salud humana existe una deficiencia en

estudios científicos que caractericen e identifiquen riesgos asociados a la salud por el consumo, ingesta o cualquier otro tipo de contacto del metabolito 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno, sin embargo, sí existen estudios que caracterizan al clorotalonil como altamente tóxico para la vida acuática y moderadamente tóxico en aves y lombrices. Por lo que se debe de considerar con extrema precaución cualquier indicio de contaminación con este plaguicida o metabolito y tomar las medidas necesarias para evitar su ingesta o contacto en vista de la poca evidencia científica que existe referente a la salud humana y apoyarse en los estudios que confirman la ecotoxicidad que presenta, así como el riesgo para la salud ambiental (...)».

Durante el curso del proceso, además, se comprobó que diversos informes técnicos distintas administraciones públicas llegaron a la misma conclusión con relación a la pertinencia de prohibir el uso de productos a base de clorotalonil.

En efecto, en un informe del Ministerio de Salud «... se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jefes del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (...)».

Por otra parte, en otro informe técnico, esta vez del mismo ministerio en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados llegaron a la conclusión de recomendar la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica, en línea con las medidas adoptadas por la Unión Europea. Se deben implementar medidas de seguridad y alternativas para la agricultura que minimicen la exposición de los trabajadores y de los consumidores, así como velar por la protección de las fuentes de agua, el medio ambiente y la salud de la población (...)».

Con sustento en esas pruebas, el tribunal constitucional consideró que «... no estamos solamente ante el riesgo de consumir agua contaminada, sino que se evidencia de los informes técnicos existentes en el expediente, que existe un riesgo de que esta agua contaminada se utilice para el riego de las sembradías de apio, brócoli, café, cebolla, chile dulce, coliflor, frijol, tomate, zanahoria, repollo, papa, entre otros productos que son cultivados en la zona norte de la provincia de Cartago; así como, a todas las especies que pueden encontrarse en la zona, tales como peces, anfibios, entre otros, que también en el caso de los peces son de consumo humano y los residuos que queden en todos estos productos y especies marinas, son a los que se verían expuestos los consumidores, por lo

que, como se ha analizado en esta sentencia, el impacto podría ser mucho mayor del que se evidencia de manera preliminar».

Como resultado de lo anterior, se estableció en el fallo constitucional que «...dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, y en consonancia con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, se adopten y ejecuten las recomendaciones del informe sin número de 14 de abril de 2023, emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, denominado «Informe Técnico Clorotalonil», para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas; se brinde seguimiento a tales recomendaciones, y se emitan las actuaciones pertinentes para garantizar su adecuado y oportuno cumplimiento».

Queda así claro el origen del decreto ejecutivo 44280-S-MAG-MINAE que, en definitiva, dispone la prohibición del uso de productos a base de clorotalonil.

Solo resta lamentar que se haya dispuesto en el transitorio único del decreto lo siguiente:

«Transitorio único: Las personas físicas o jurídicas que importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo Clorotalonil, tendrán un plazo improrrogable de seis meses en todo el territorio nacional contado a partir de la publicación de este Decreto Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta para agotar sus existencias en el mercado nacional. Vencido este plazo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Salud procederán a la cancelación de todos los registros que contengan este ingrediente activo».

Es claro que ante la evidencia técnica recopilada en el proceso de amparo con relación a los riesgos ambientales y de salud pública que representa el uso del referido fungicida, era de esperar que lejos de dar un plazo de seis meses para agotar existencias, se ordenara el retiro inmediato del producto.

BIBLIOGRAFÍA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Ley No. 10372: Protocolo de Nagoya sobre participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de su utilización al convenio sobre diversidad biológica y su anexo. 14 de noviembre de 2023.

- ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Ley No. 9786: Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente. 26 de noviembre de 2019.
- Expediente legislativo No. 21550: Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica y su anexo anteriormente denominado Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 9 de agosto de 2019.
- CABRERA MEDAGLIA, Jorge. Protocolo de Nagoya y sus Beneficios en Página Quince. s.f.
- NACIONES UNIDAS. CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, 29 de diciembre de 1993
- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, Examen del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE en las áreas de medio ambiente y residuos. 10 de abril de 2020.
- PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Decreto Ejecutivo No. 43985-S: Reglamento a la Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente N° 9786 del 26 de noviembre del 2019. 10 de marzo de 2023.
- Decreto Ejecutivo No. 44280-S-MAG-MINAE, se prohíbe el registro, la importación, la exportación, la fabricación, la formulación, el almacenamiento, la distribución, el transporte, el reempaque, el reenvase, la manipulación, la venta, la mezcla y el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo clorotalonil. 24 de octubre de 2023.
- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia No. 06154-2023. Costa Rica: 14 de marzo de 2023.
- Sentencia No. 13378-2023, Costa Rica: 6 de junio de 2023.